

Comunidad Internacional debe actuar ante histórico llamado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por una reforma sistémica a la política de drogas — 133 organizaciones de 48 países

Miércoles, 20 de septiembre de 2023 (Ginebra, Suiza) — En un histórico [informe](#) publicado hoy, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia el fracaso de las políticas punitivas en materia de drogas y de la “guerra contra las drogas” global, y aboga por un nuevo enfoque basado en la salud y los derechos humanos, que incluya la regulación legal de las drogas. Para poder implementar las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado, hacemos un llamado a la comunidad internacional a que reforme y reequilibre el régimen mundial de control de drogas, así como las leyes y políticas nacionales en materia de drogas.

Durante décadas, el objetivo poco realista de lograr una “sociedad libre de drogas” ha llevado a la comunidad internacional a abordar las drogas por medio de la prohibición, la criminalización y el castigo severo. Tras la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2016 (UNGASS, por sus siglas en inglés) se ha hecho cada vez más hincapié en los aspectos de salud, derechos humanos y desarrollo relacionados con las drogas y las políticas de drogas. Pero los esfuerzos para materializar estos compromisos han sido insuficientes. Ahora, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha tomado un valiente paso con el reconocimiento inequívoco de que las políticas de drogas punitivas impulsan violaciones generalizadas de los derechos humanos y alimentan la discriminación.

Con este informe, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se convierte en la primera agencia de esa organización en pedir una regulación legal responsable de las drogas como medida pragmática para proteger la salud pública y los derechos humanos de todas las personas. Esto se presenta en un momento en que más de 250 millones de personas viven en jurisdicciones donde los mercados legales de cannabis son una realidad, y en que países como Colombia y Alemania están anunciando planes similares. Además, Bolivia acaba de poner en marcha el proceso para revisar la clasificación y el control internacional de la hoja de coca, tras ser sometida a fiscalización internacional en 1961 sobre la base de prejuicios anticuados y racistas.

El nuevo informe también sistematiza el creciente conjunto de recomendaciones sobre política de drogas formuladas por expertos en derechos humanos de la ONU. Como tal, sirve de modelo para diseñar respuestas basadas en el respeto de la salud pública y los derechos humanos.

Algunas de las conclusiones más importantes incluyen:

- Reconocer la reducción de daños como un elemento central del derecho a la salud
- Identificar la militarización del control de drogas como motor de la violencia estatal
- Pedir la abolición de la pena de muerte por delitos de drogas
- Reconocer la contribución de las desproporcionadas leyes de drogas al encarcelamiento masivo global
- Documentar el uso de las políticas de drogas para atacar a grupos marginados como los pueblos indígenas, las personas de ascendencia africana y mujeres.
- Reconocer los desproporcionados efectos negativos de la prohibición y la criminalización sobre poblaciones atrapadas en crisis humanitarias.

Transformar el enfoque punitivo a las drogas a nivel global requiere cambios estructurales en las normas e instituciones del régimen internacional de control de drogas, que históricamente se han centrado en la prohibición y la criminalización. Esto incluye reformar las convenciones de control de drogas de la ONU, así como reequilibrar sus organismos de control de drogas, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que siguen siendo reticentes a comprometerse con los países para promover las políticas de drogas alternativas en que se fundamenta la propuesta del Alto Comisionado, incluyendo la despenalización del consumo de drogas y actividades relacionadas, así como la necesidad de aumentar el acceso equitativo a los servicios de reducción de daños, ambos centrales en la [Posición Común](#) del Sistema de las Naciones Unidas sobre drogas.

Considerando la importancia histórica del informe del Alto Comisionado, ofrecemos colectivamente las siguientes recomendaciones:

- Instamos a los Estados miembros a que aprovechen la próxima [revisión intermedia](#) de la Declaración Ministerial sobre drogas de 2019 para reequilibrar el enfoque global de las drogas consagrando la protección de los derechos humanos, la salud pública y los principios de igualdad y no discriminación como objetivos esenciales del sistema global de control de drogas, y a que agreguen un punto sobre la protección de los derechos humanos en la agenda de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
- Llamamos a la comunidad internacional a que involucre significativamente a las organizaciones de la sociedad civil y a las poblaciones directamente afectadas por la “guerra contra las drogas”, incluyendo las poblaciones clave como las personas que consumen drogas y las personas involucradas en economías ilícitas (en sus diferentes etapas), en la toma de decisiones sobre políticas de drogas, implementación, monitoreo y evaluación.
- Instamos a los Estados miembros a iniciar una revisión de las convenciones de drogas de la ONU para permitir un enfoque basado en los derechos humanos, la regulación legal y en derogar las disposiciones que exigen la abolición de los usos tradicionales de las plantas y sustancias controladas internacionalmente.
- Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que cree un mecanismo para la presentación periódica de informes y la elaboración de recomendaciones sobre cómo alinearlos derechos humanos con la política de drogas. Esto debería hacerse a través de un mandato periódico para que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos informe sobre los impactos de la política de drogas en los derechos humanos o la creación de un órgano de investigación o mandato especial sobre la política de drogas.
- Acogemos con satisfacción el creciente número de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU con respecto a las implicaciones de las políticas de drogas sobre los derechos humanos. Animamos a todos los mecanismos de derechos humanos a seguir el camino abierto por el Alto Comisionado centrándose en cómo las políticas punitivas de drogas, incluyendo el régimen global de control de drogas, pueden convertirse en obstáculos en sí mismos para el pleno disfrute de los derechos humanos.
- Hacemos un llamado a los órganos de fiscalización de drogas, incluyendo la ONUDD y la JIFE, para que integren la dimensión de derechos humanos de la política de drogas en sus planes de trabajo de forma sistemática, y garanticen que esto se refleje en sus informes anuales e incorporen las conclusiones y normas establecidas por el Alto Comisionado en su cooperación con los Estados miembros.
- Hacemos un llamado a la ONUDD, a los Estados miembros y a los organismos nacionales de control de drogas para que se abstengan de apoyar y financiar respuestas punitivas a las drogas, y garanticen que cualquier asistencia financiera y técnica proporcionada a terceros países para operaciones de aplicación de la ley de drogas no contribuya, o conlleve un riesgo real de contribuir a la comisión de violaciones de los derechos humanos.
- Hacemos un llamado a las agencias de la ONU y a los actores de la comunidad internacional en los servicios de salud y protección para que integren los servicios de reducción de daños en el marco de la respuesta humanitaria.
- Instamos a las agencias de la ONU con mandatos relevantes a seguir el ejemplo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos poniendo fin al tabú sobre la regulación legal de las drogas, y a proporcionar pruebas, recomendaciones y normas internacionales sobre mercados legalmente regulados alineados con los valores de la ONU de promover la salud, los derechos humanos y el desarrollo.

Lista de organizaciones firmantes (en inglés):

1. Aboriginal Drug & Alcohol Council, Australia
2. Addiction Medicine Association of Malaysia (AMAM), Malaysia
3. Alliance Nationale Des Communautés Pour La Santé (ANCS), Senegal
4. Amnesty International, Global
5. Andrey Rylkov Foundation for Health and Social Justice, Russia
6. Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN), Malaysia
7. APCOM Foundation, Asia and the Pacific
8. Asia Pacific Network of People living with HIV (APN+), Thailand
9. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Costa Rica
10. Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares sobre Drogas (ABRAMD), Brazil
11. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersex (ABGLT), Brazil
12. Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME), Brazil
13. Associação Elas Existem - Mulheres Encarceradas , Brazil
14. Black Initiative for a New Drug Policy, Brazil
15. Brazilian Network of Harm Reduction and Human Rights (REDUC), Brazil
16. Brazilian Drug Policy Platform, Brazil
17. Brussels Federation of Institutions for Drug and Addictions (féda bxl), Belgium
18. Canadian Drug Policy Coalition, Canada
19. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDDH), Peru
20. Centre for Research and Information on Substance Abuse (CRISA), Nigeria
21. Centre of Excellence for Research in AIDS (CERIA), Malaysia
22. Centre on Drug Policy Evaluation (CDPE), Canada
23. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
24. Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana AlaOrillaDelRío, Colombia
25. Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UnB, Brazil
26. Children's Legal Rights and Development Center (CLRDC), Philippines
27. Citywide Drugs Crisis Campaign, Ireland
28. Coletiva Todas Unidas, Brazil
29. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Ecuador
30. Consumidores Associados Sobrevivem Organizados (CASO), Portugal
31. Corporación Acción Técnica Social, Colombia
32. Corporación Feminista Brujas, Colombia
33. Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Colombia
34. Corporación Mujeres Libres, Colombia
35. Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN), Netherlands
36. CREA, India/USA
37. Dejusticia, Colombia
38. Deliberar, Colombia
39. Drug Harm Reduction Advocacy Network Nigeria (DHRAN), Nigeria
40. Drug Policy Alliance, USA
41. Drug Policy Australia, Australia
42. Drug Policy Network South East Europe (DPNSEE), Serbia
43. Društvo AREAL, Slovenia
44. Elementa DDHH, Colombia/México
45. Empower India, India
46. Equal Health and Rights Access Advocacy Initiative (EHRAAI), Nigeria
47. EQUIS Justicia para las Mujeres, México
48. Estonian Association of People Using Psychoactive Substances "LUNEST", Estonia
49. Eurasian Harm Reduction Association (EHRA), Lithuania
50. Familias y Retos Extraordinarios AC, México
51. Federal Council of Psychology, (Conselho Federal de Psicologia), Brazil
52. Fédération Addiction, France
53. Forum Droghe, Italy
54. Foundation Mainline, Netherlands
55. Free Legal Assistance Group (FLAG), Philippines
56. Fundación Dignidad, Ecuador
57. Fundación Latinoamérica Reforma, Chile
58. Gayon Albay LGBT Org., Inc., Philippines

59. Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), Portugal
60. Harm Reduction Australia (HRA), Australia
61. Harm Reduction International, United Kingdom
62. Health Poverty Action, Global
63. Heart That Cares For Better Health Organization, Nigeria
64. Helsinki Foundation for Human Rights, Poland
65. Hepatitis Australia, Australia
66. HIV Legal Network/Réseau juridique VIH, Canada
67. House Of Rainbow CIC, United Kingdom
68. Humaania päihdepolitiikka ry, Finland
69. IDUCARE, Philippines
70. India HIV/AIDS Alliance, India
71. Indian Drug Users' Forum, India
72. Institute of Politics and Governance (IPG), Inc., Philippines
73. Instituto RIA, AC, Mexico
74. Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), Brazil
75. Intercambios Civil Association, Argentina
76. International AIDS Society, Switzerland
77. International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS), Spain
78. International Commission of Jurists, Switzerland
79. International Drug Law Advocacy and Resource Center, USA
80. International Drug Policy Consortium (IDPC), Global
81. International Network of People who Use Drugs (INPUD), Global
82. International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW), Malaysia
83. Kaleidos – Universidad de Cuenca, Ecuador
84. La Società della Ragione Onlus, Italy
85. Law Enforcement Action Partnership, USA
86. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia
87. Malaysian AIDS Council, Malaysia
88. Manipur Users Collective, India
89. Mexico Unido Contra la Delincuencia A.C., Mexico
90. Middle East and North Africa Network of People Who Use Drugs (MENANPUD)
91. Mujeres Unidas por la Libertad México, A.C, Mexico
92. National Network Of Anti-Prohibitionist Feminists, Brazil
93. Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD), Thailand
94. NGO Cannabis Institute Pelagonija, Prilep, North Macedonia
95. Nigeria Network of People who use drugs (NNPUD), Nigeria
96. NoBox Transitions Foundation Inc. (NoBox Philippines), Philippines
97. NZ Drug Foundation, New Zealand
98. Observatorio De Derechos Humanos Para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), Republica Dominicana
99. Open Society Foundations, Global
100. Organisation for the Prevention of Intense Suffering (OPIS), Switzerland
101. Ozone Foundation, Thailand
102. Paroles Autour de la Santé et de Environment, Ivory Coast
103. Penal Reform International (PRI), Global
104. Pengasih Malaysia, Malaysia
105. Penington Institute, Australia
106. Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
107. POS Foundation, Ghana
108. PREKURSOR Foundation for Social Policy, Poland
109. Recovering Nepal, National Federation of PUD and Drug Service Organization, Nepal
110. Red Internacional de Mujeres Familiares de personas privadas de la Libertad (RIMUF), Global
111. Red Latinoamericana de Mujeres Libertarias Fundiendo Rejas, Latin America
112. Redes da Maré, Brazil
113. Release, United Kingdom
114. Released Malta, Malta
115. RESET - Drug Policy and Human Rights, Argentina

116. Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS PLUS),
Burkina Faso
117. Rights Reporter Foundation (RRF), Hungary
118. SANANIM, Czech Republic
119. Sexual Rights Initiative, Switzerland
120. Sikkim Drug Users Forum (SDUF), India
121. Skoun Lebanese Addictions Center, Lebanon
122. Steps Non Profit, Greece
123. Stop Overdose Now Foundation, Netherlands
124. StoptheDrugWar.org, USA
125. StreetLawPh, Philippines
126. TB HIV Care NPC, South Africa
127. Transform Drug Policy Foundation, United
Kingdom
128. Transformative Justice Collective, Singapore
129. Transnational Institute, Netherlands
130. Uniting NSW, Australia
131. Washington Office on Latin America (WOLA), USA
132. Women and Harm Reduction International
Network (WHRIN), Indonesia
133. World Coalition Against the Death Penalty, Global
134. Youth RISE, Global